



Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL CONTRATO DE SERVICIOS TITULADO “SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO PARA DESPACHO DE DIRECCIÓN Y ALMACENAJE DE OFICINA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN EN LA SEDE DE EMBAJADORES, 181 DE MADRID”.

Se emite este informe a los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que:

“4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.*

1. ELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN (Art. 116.4.a) de la LCSP.

El procedimiento de adjudicación que se propone para este contrato es el **procedimiento abierto simplificado abreviado**, debido a que se trata de un contrato de suministro con un valor estimado menor de 60.000 euros, conforme al art. 159.6 de LCSP, y las ofertas se evaluarán exclusivamente con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

La elección de este procedimiento permite agilizar los plazos de licitación (tiempos más cortos para la recepción de oferta, adjudicación y formalización) y adjudicación y requisitos documentales (reducción de sobres y no necesaria constitución de la mesa de contratación) y procedimentales de tramitación sin menoscabar los principios de igualdad y concurrencia entre operadores económicos.

Por otra parte, atendiendo a las características del contrato, se ha considerado utilizar una **pluralidad de criterios**, lo cual permite obtener la oferta que mejor responda a las necesidades de la Consejería, favoreciendo la obtención de una mejor relación calidad-precio. Sobre este aspecto, es importante significar que no se ha previsto ningún criterio evaluable mediante juicio de valor.

Respecto al tipo de tramitación, no concurre ninguna circunstancia que haga necesario recurrir a la vía de tramitación de urgencia del expediente, contemplada en el Art. 119 de la LCSP, por lo que las prestaciones objeto del contrato se contratarán con arreglo a

la tramitación ordinaria.

2. CLASIFICACIÓN QUE SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES (Art. 116.4.b) de la LCSP.

No procede.

3. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL, Y ECONÓMICA Y FINANCIERA (Art. 116.4.c) de la LCSP.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 159.6.b) de la LCSP, en el procedimiento abierto simplificado abreviado se exige a los licitadores de tener que acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

4. CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA ADJUDICAR EL CONTRATO (Art.116.4 c) de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el art. 145.3 g) de la LCSP, al tratarse de un contrato de suministro en el que es posible introducir modificaciones por los licitadores en su proposición, no siendo el precio el único factor determinante de la adjudicación, procede la introducción de criterios cualitativos con los que evaluar, en combinación con el precio, las propuestas que se presenten.

Los criterios de valoración propuestos son de valoración objetiva en su totalidad mediante criterios valorables en cifras y porcentajes: **80 puntos para el precio y 20 puntos por la inclusión de una mejora objetiva relacionada con el plazo de entrega.**

Esta distribución de puntos se ha determinado, considerando lo establecido en el criterio 4º de la circular de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen criterios de homogeneización, de 17 de enero de 2020, en el que en su apartado 3, se indica:

3. Resto de contratos distintos a los anteriores: con carácter general, el porcentaje asignado al criterio precio debería ser, al menos, del 70% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. Con este porcentaje el precio no tendría un peso determinante en la adjudicación del contrato, dado que el resto de criterios de valoración objetiva supondría hasta un 30% de la valoración del contrato, cumpliendo así con lo estipulado en el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público. Si existieran casos excepcionales en los que los centros gestores entendieran que deben establecer criterios cualitativos por un mayor porcentaje, se deberá justificar tal excepcionalidad mediante una memoria explicativa que deje clara de forma indubitada tal necesidad. En estas excepciones los criterios objetivos no deberían superar el 50% de la valoración del contrato.

La valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se realizarán con arreglo a los criterios de adjudicación que se indican a continuación:

4.1.- Criterios relacionados con los costes: propuesta económica

- **Criterio precio: hasta 80 puntos.**

Se asignarán **80 puntos** a la oferta económica más baja y 0 puntos a la oferta que se ajuste al presupuesto de licitación. El resto de ofertas se valorarán proporcionalmente entre ambas puntuaciones, con aplicación de la siguiente fórmula:

$$PX = 80 \times (\text{Oferta 0} - \text{Oferta X}) / (\text{Oferta 0} - \text{Oferta 1}).$$

Donde:

- PX: Puntuación resultante de la oferta en estudio
- Oferta 0: Presupuesto de licitación.
- Oferta 1: Oferta económica más baja.
- Oferta X: Oferta en estudio.

Justificación del criterio.

En lo que se refiere a la base legal para aplicar este criterio, cabe reseñar que en el artículo 145.2 de la LCSP, se establece que establece que la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Por otra parte, la elección de este criterio se sustenta en que, en un suministro de mobiliario, el precio es un factor crucial para garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con lo que se alinea con el principio de economía en la gestión de fondos públicos.

En cuanto a la ponderación, aplicada, se considera que, al darle un valor relativamente alto, se incentiva la competencia entre los licitadores para obtener el mejor precio posible, máxime si se tiene en cuenta la gran diversidad de productos que existen en el mercado que cumplen, a priori, los requisitos exigidos en el expediente.

Por último, la fórmula elegida asegura la objetividad en la selección. Se trata de una fórmula lineal que garantiza la proporcionalidad en la distribución de puntos, con el fin de otorgar la máxima puntuación a la mayor baja y no otorgar puntuación a la oferta que no realiza baja sobre el presupuesto base de licitación.

4.2.- Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

- **Criterio reducción del plazo de entrega: hasta 20 puntos.**

A los licitadores que incluyan en su oferta el compromiso de reducir el plazo de entrega del mobiliario, se les otorgará un máximo de 20 puntos, según el siguiente baremo:

- Siete (7) días naturales de reducción: 10 puntos.
- Quince (15) días naturales de reducción: 20 puntos.

Aquellas ofertas en las que el licitador no oferte reducción del plazo de ejecución material, obtendrán cero (0) puntos.

Justificación del criterio.

La utilización del plazo de entrega como criterio cualitativo para evaluar la mejor relación calidad-precio, se menciona expresamente en el art. 145.2.3 de la LCSP, cuando cita como ejemplo diferentes aspectos evaluables relacionados con las condiciones de

entrega de los productos.

La elección de la reducción del plazo de entrega como criterio cualitativo permitirá disponer del mobiliario en el menor tiempo posible, lo que redundará en el cumplimiento de los plazos de tiempo comprometidos para lograr la efectiva implantación de la S.G.T. en la sede de Embajadores nº 181. Favorece, asimismo, la concatenación de los trabajos de suministro y montaje con el resto de las actuaciones relacionadas con la implantación, en particular, en lo que se refiere a la ejecución previa de la obra de acondicionamiento y a la instalación posterior de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones.

4.3.- Acreditación acerca de los compromisos ofertados por el licitador, en relación a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática.

Para la valoración de estos compromisos, se presentará un único documento, según el modelo concreto establecido en los anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.4.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

De los criterios objetivos que se han establecido, se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, el señalado con el número 1 (precio), ya que dicho criterio es el único que se considera relevante para determinar la viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto. En cuanto a los límites para determinar que una proposición es inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, se tendrán en consideración los distintos supuestos recogidos en el artículo 85 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, estándose en cada caso a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.

5. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Art. 116.4.c) de la LCSP)

Se establece una condición especial de ejecución de carácter ambiental, la cual **adquiere el carácter de “obligación contractual esencial de ejecución”**, en correspondencia con lo dispuesto en art. 211.1 f) de la LCSP.

De conformidad con lo señalado en el artículo 202.1 de la LCSP, así como en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid, se introduce la siguiente condición especial de ejecución de carácter ambiental:

El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato, en particular durante las operaciones de desembalaje, montaje e instalación del mobiliario suministrado. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado, contribuyendo así al mantenimiento de los valores medioambientales afectados por la ejecución del contrato.

El establecimiento de la exigencia de que el adjudicatario del contrato se responsabilice de recoger de forma selectiva los residuos que se generen durante el desembalaje, montaje e instalación del mobiliario, con vistas a su correcto reciclado, contribuirá, de forma particular, a minimizar el impacto que sobre el medioambiente se genere como consecuencia de la ejecución del contrato.

En este sentido, cabe significar que el reciclado de los residuos permite reutilizar los materiales que se utilicen como embalajes, como es el caso de los elementos constituidos por cartón (cajas, separadores, etc.) o la madera usada en los palés, para producir nuevos productos, lo que contribuye a la economía circular y a la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Por último, sobre este aspecto, se considera necesario poner de manifiesto el compromiso de la Administración de la Comunidad de Madrid con el medioambiente a través de diversas iniciativas entre las que cabe destacar la promoción de un desarrollo sostenible.

Una vez argumentada la mejora en el medioambiente que se introduciría con el establecimiento de la presente condición especial de ejecución, el paso siguiente es analizar su conformidad con los requisitos que se establecen en el art. 202 de la LCSP.

En cuanto a su vinculación con el objeto del contrato, ésta queda demostrada desde el momento en el que se hace referencia a los residuos generados durante la ejecución del contrato, ya sea en forma de embalaje (cartón, plástico, madera, etc.) o de envases.

En relación a su carácter no discriminatorio, cabe señalar que la aplicación de esta condición afectaría del mismo modo a todos los licitadores, siéndole exigible una vez iniciada la ejecución del contrato. Resalta, de igual manera, que su alcance es temporal y está limitada al plazo de ejecución.

Respecto a su compatibilidad con Derecho Nacional y de la Unión Europea, tampoco debe surgir duda alguna, ya que se trata de una consideración de tipo medioambiental que tiene como finalidad principal el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; finalidad ésta que aparece expresamente contemplada en el Art. 202 de la LCSP.

Con base en lo anterior, se considera debidamente justificada la validez de la condición especial de ejecución referida, así como su formulación con arreglo a lo dispuesto en el Art. 202 de la LCSP.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Art. 116.4.d) de la LCSP).

El cálculo del valor estimado, se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 101.5 de la LCSP con las concreciones siguientes:

- No se prevé que el contrato pueda modificarse.
- No se prevé la existencia de prórrogas del contrato.

Conforme a estas circunstancias, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible y asciende a **20.715,00** euros.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A LA QUE SE PRETENDE DAR SATISFACCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO (Art. 116.4.e) de la LCSP)

En relación a este apartado, se ha elaborado informe justificativo concreto que se adjunta al expediente.

8. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS. (Art. 116.4.f) de la LCSP)

No procede.

9. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES (Art. 116.4.g) de la LCSP)

De conformidad con lo establecido en el Art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación las razones por las que se ha tomado la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato.

El objeto del presente contrato es el suministro, montaje e instalación de mobiliario para equipar tanto el despacho de dirección de la Secretaría General Técnica como otros diferentes despachos, así como armarios de diverso tamaño, con el fin de procurar la adecuada implantación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Digitalización en la sede sita en la calle Embajadores nº 181 de la localidad de Madrid.

Atendiendo al hecho de que el conjunto de actividades previstas en el contrato, en un principio, son susceptibles de ser tratadas de forma separada, como es el caso de dividir el contrato en función de la tipología del mobiliario que se ha de suministrar o, incluso, dependiendo de la actividad a realizar como, por ejemplo, el suministro, limitado al transporte y entrega y, por otro lado, el montaje y la instalación en las ubicaciones señaladas, se ha analizado la conveniencia de adoptar tal decisión, centrándose principalmente en el impacto que tendría desde el punto de vista técnico y organizativo.

El resultado de dicho análisis ha puesto de manifiesto que, con independencia de la necesidad de garantizar una armonía estética y una funcionalidad igual o similar al del mobiliario del que ya se dispone en la sede, cuestión que se considera resuelta con el establecimiento de los requisitos técnicos previstos en el PPT, la implantación de los puestos de trabajo requiere que la entrega de los muebles y su instalación se realice dentro de unos plazos muy determinados dentro del conjunto de actuaciones que conlleva la implantación.

Así, dentro de la planificación de los trabajos, el suministro y montaje del mobiliario se encuadra entre los trabajos previos de acondicionamiento de los espacios y los posteriores referidos a la electrificación de los puestos de trabajo y a la constitución de la red de datos y de comunicaciones.

Para que la ejecución de los trabajos se realice dentro de los plazos previstos es necesaria una adecuada coordinación entre los diferentes sujetos que participan en la implantación y dicha coordinación puede verse dificultada cuanto mayor sea el número de participantes; circunstancia ésta que se produciría si el contrato se divide en lotes. Además, desde el punto de vista técnico, esta decisión dificultaría la acción de control y seguimiento de la prestación contratada, lo cual podría afectar a la calidad del suministro, máxime si se tienen en cuenta los limitados recursos de los que se dispone para tal fin.

Por otra parte, considerando la cuantía del presupuesto base de licitación, la división en lotes del contrato podría ser la causa de que alguno de los lotes o, incluso, todos los que resulten de la división queden desiertos, al entender las potenciales empresas licitadoras que no resultan ser lo suficientemente atractivos desde un punto de vista económico. Este hecho, de por sí, afectaría gravemente al desarrollo de la planificación fijada para la implantación de la Secretaría General Técnica y, por ende, a la actividad administrativa de la Consejería.

Con base en todo lo anterior, se considera razonablemente justificada la decisión de no dividir el objeto del contrato en lotes por resultar ineficaz para su correcta ejecución técnica, ineficiente desde el punto de vista organizativo y potencialmente lesivo para los intereses de la Administración, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.


Madrid, a fecha de la firma
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN

Firmado digitalmente por: APARICIO MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Fecha: 2025.06.17 18:27

Fdo.: Miguel Ángel Aparicio Muñoz

Vº Bº

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: JUDIT DIEZ MANZANEDO - 
Fecha: 2025.06.18 11:32

Fdo.: Judit Díez Manzanedo